



Acuerdo Ciudadano por el Cambio

Hay momentos que condensan las esperanzas e ilusiones de muchos años y mucha gente. El proceso político de los últimos tiempos ha abierto la posibilidad del cambio. El 15M y la Primavera Valenciana pusieron sobre la mesa que las instituciones estaban en manos de gobernantes que las usaban en beneficio propio y de sus amiguetes. Ha habido una separación creciente entre la clase política y la ciudadanía. Cuando los políticos han tenido que escoger entre rescatar a la ciudadanía o a los poderosos no han dudado en traicionar a quienes les habían votado, dando la espalda a las demandas de la gente. Las decisiones se han presentado como inevitables, auténticos dictados obligatorios de los poderes que no se presentan a las elecciones. Esta situación de expropiación de la democracia hacía necesario que gente corriente diera un paso adelante para recuperar las instituciones y ponerla al servicio de todas las personas. El 24 de mayo dimos un primer paso que hay que continuar.

“Somos el Pueblo”, les repetíamos. Somos esa comunidad de personas que madrugan cada día para hacer funcionar el país. Nosotros somos las madres, los maestros, las emprendedoras, los dependientes, las camareras. Somos los que sufrimos para llegar a fin de mes, los que tenemos cada día la amenaza del desempleo, o de tener que cerrar la empresa. Somos los vecinos que convivimos pared con pared. Somos los perjudicados por esas políticas que ahora podemos cambiar: los que hemos visto bajar los salarios y aumentar la temporalidad, caer las becas y subir las tasas de la universidad, congelar pensiones y aumentar los impuestos, empeorar los servicios públicos y no cobrar la dependencia; los que hemos visto cómo esos recursos recortados iban al pozo de la deuda y a los bolsillos de los políticos y cómo todo el modelo social que habían construido nuestras madres y padres lo estaban destruyendo en contra de los

intereses y la voluntad de la gente. Somos el pueblo y no queremos nunca más unas instituciones que gobiernen contra nosotros.

Las elites valencianas tienen un proyecto de país muy alejado de las necesidades de la ciudadanía. Su apuesta de convertirnos en la playa de Madrid ha colapsado por insostenible e injusta. La herencia que nos han dejado ha sido una sociedad empobrecida, un modelo económico agotado por su orientación hacia el ladrillo y la especulación, unas instituciones de segunda con poca capacidad de hacer políticas por la falta de recursos. Su proyecto de región sumisa ha vendido una y otra vez los intereses de los valencianos y valencianas, empeorando así las condiciones de vida de la mayoría. El viejo recurso del Levante Feliz ya no les sirve para tapar las miserias que han generado.

Las elites de hoy no son diferentes de las de ayer: sus lealtades no están con los valencianos. Sólo responden a una patria: su patrimonio. Para conservar sus privilegios siempre han hecho lo que hiciera falta: en el pasado no dudaron en abandonar la lengua y ahora no han dudado en actuar como una mafia que ha saqueado el país a base de especulación y corrupción. El cierre de RTVV y la tolerancia con la infrafinanciación estructural son dos caras de la misma política profundamente antivalenciana.

Nosotros venimos de otra tradición: la de las valencianas y valencianos que han sudado para construir un futuro para los suyos. Somos la gente corriente la que hemos mantenido en pie esta comunidad, antes y ahora. Lo hemos hecho cuando hicimos brotar de la tierra arroz y naranjas y transformamos la nieve en helados y la ojalata en juguetes. Lo hemos hecho cuando hemos parado los desahucios y hemos tejido una red potente de defensa de los servicios públicos. Lo hemos hecho desde los talleres clandestinos del textil y el calzado del Baix Vinalopó y las industrias de Sagunt. Ahora tenemos la generación más preparada y la experiencia de los que siempre lo han dejado todo para garantizar que el pan entrara a cada casa, para poner en pie un proyecto de país para todas las personas.

Durante un tiempo, los gobiernos del PP nos han hecho avergonzarnos de ser valencianos. No queremos nunca más tener que bajar la cabeza por ser la región de la corrupción. Queremos estar orgullosos de ser el país que garantiza la gratuidad de los libros escolares. Los valencianos somos los que nos dejamos la piel en hacer que esta sociedad funcione y no los que se han

encargado de saquearla, venderla y hundirla. Las valencianas somos una comunidad de iguales y no unas élites que lo quieren todo en manos de unos pocos.

Desde Morella hasta Orihuela, pasando por Requena y Alicante, la gente que habitamos este territorio aspiramos a un proyecto de futuro en común. Nos reconocemos como una comunidad plural con dos lenguas y dos denominaciones. Nos queremos como una sociedad donde todos tengan oportunidad de prosperar, vengan de donde vengan y hablen como hablen. En el pasado las disputas estériles por banderas y nombres nos hicieron débiles, obteniendo una autonomía de segunda y un estado del bienestar devaluado. De tanto ofrecer las glorias que no tenemos nos hemos convertido en la autonomía más endeudada. Las élites han querido que nos arrodilláramos; nosotros decimos que queremos una relación de igualdad como uno de los pueblos que forma la España plurinacional.

Insistimos: las condiciones para el cambio están dadas. Pero este no es ni inevitable ni irreversible. El 24 de mayo dimos un primer paso que ya está dando frutos; ahora toca cerrar este ciclo electoral articulando el espacio democrático que es socialmente mayoritario. Son tiempos de cambio y eso requiere nuevas herramientas. El presente acuerdo asienta unas bases sólidas para construir herramientas capaces de materializar las demandas de la gente. Es un acuerdo inédito al representar una gran alianza de futuro entre organizaciones, partidos, sindicatos, movimientos sociales, plataformas y ciudadanía. Las personas firmantes queremos lanzar un mensaje: tenemos el mismo proyecto de futuro para la sociedad valenciana. Venimos de sitios muy diferentes y en el pasado hemos votado a partidos distintos, pero ahora nos une una idea fuerte: un proyecto de país para todos y todas, opuesto a la sociedad de privilegiados que los que gobernaban la Generalitat y todavía gobiernan el Estado quieren. La voluntad de una mayoría de valencianos va por otros caminos:

- * Recuperar y ampliar el Estado del Bienestar equiparándolo a niveles europeos.
- * Rescatar la democracia para que nunca más las políticas que nos afectan estén decididas por élites que no se presentan a las elecciones.
- * Impulsar la transparencia, la participación y la honestidad en el funcionamiento de las instituciones, desterrando la corrupción, el nepotismo y el despilfarro.
- * Garantizar los derechos sociales para que todas las personas tengan cubiertas las necesidades básicas y puedan acceder a las mismas oportunidades de futuro.

*Impulsar políticas efectivas de igualdad, que combatan la exclusión social y eliminen cualquier discriminación de género

* Adoptar la sostenibilidad como principio rector de la sociedad, la economía y el medio ambiente.

Por eso apostamos por un cambio en la orientación de las políticas públicas:

1.- Las actuales políticas de austeridad son estériles económicamente y generadoras de sufrimiento y exclusión social. La forma de reactivar la recuperación para todos no es recortar sino destinar recursos públicos a generar actividad económica en sectores sostenibles. La reducción del déficit público (de la Generalitat Valenciana, del Estado) ha de estar subordinada a la aplicación de políticas de desarrollo económico.

2.- La inversión social pública ha de equipararse a los estándares europeos. El Estado del Bienestar valenciano ha sido de segunda, con un gasto inferior al español y al europeo. La Comunitat Valenciana tiene que recuperar la senda de convergencia social con el modelo social avanzado del norte de Europa. Los derechos sociales tienen que contar con suficiencia presupuestaria para implementarlos. Por eso son necesarios 3 elementos: (1) la quita de la parte de la deuda de la Generalitat con el Estado correspondiente a la infrafinanciación, (2) la negociación de un nuevo sistema de financiación centrado en la corresponsabilidad fiscal y (3) la derogación del artículo 135 de la Constitución Española.

3.-La auditoría ciudadana es la fórmula para determinar los efectos de las medidas económicas de años anteriores y la responsabilidad en la deuda y en el rescate bancario. Además es imprescindible una reforma fiscal profunda que ha de basarse en garantizar recursos suficientes para hacer sostenible el gasto público, redistribuir hacia los que menos tienen y eliminar los privilegios de unos pocos. Es necesario equiparar la tributación efectiva de grandes empresas y grandes patrimonios al resto de la población para hacer efectiva la progresividad. Hay que combatir enérgicamente el fraude fiscal y promover un marco tributario europeo capaz de gravar los flujos de capital y acabar con los paraísos fiscales.

4.-Las instituciones públicas han de gestionar los recursos públicos de forma eficiente y transparente. Por eso hacen falta mecanismos eficaces para combatir la corrupción, el clientelismo, los privilegios de los amiguetes y el despilfarro de recursos. Así mismo las instituciones públicas han de tener un papel activo en la vida económica, regulando el mercado,

redistribuyendo las rentas, produciendo servicios fundamentales, estabilizando las fluctuaciones y guiando el desarrollo. La idea extrema del libre mercado ha de sustituirse por un paradigma mixto: el mercado y el estado han de actuar como instituciones complementarias para la generación de bienestar para todos

5.-Las actividades básicas para la existencia humana han de estar fuera de la lógica de los beneficios. Queremos que sean las instituciones públicas las que proporcionen la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia y las coberturas sociales. Apostamos también por un papel activo de los sectores no lucrativos (el Estado y el 3r sector) en sectores estratégicos como los transportes, la energía y el agua, las telecomunicaciones y la vivienda. Los derechos de ciudadanía no pueden estar subordinados a los intereses lucrativos de unos pocos. Es necesario ir hacia una sociedad inclusiva que sustituya el concepto asistencial actual por una concepción universal de garantía de derechos.

6.- El sector financiero es un actor central per al desarrollo económico i social que ha de tener una regulación pública efectiva. Además, la existencia de una banca pública es fundamental para que el sistema financiero esté al servicio de las necesidades de la economía real. Es necesaria una refundación del BCE, situándolo dentro de los parámetros democráticos y habilitándolo para estimular la creación de ocupación y desarrollo.

7.-No hay salida de la crisis sin un modelo productivo que afronte la transición ecológica hacia las renovables y los sectores verdes y la modernización de la estructura económica apostando por la innovación en la línea de los modelos avanzados del norte de Europa. Por eso, necesitamos una política industrial activa que estimule la consolidación de actividades con futuro, enterrando el modelo de especulación inmobiliaria y turismo de baja calidad que nos ha llevado a la crisis. Es necesario asegurar las inversiones necesarias para combatir el paro estructural.

8.- Las sociedades del siglo XXI deben estar basadas en las igualdades. La desigualdad social socava la democracia. La tendencia polarizadora que hemos sufrido en décadas anteriores ha de ser revertida con la redistribución fiscal y con una política de rentas que incrementen progresivamente los salarios. Por eso es necesaria una nueva reforma laboral capaz de conjugar la estabilidad con la flexibilidad, los aumentos salariales con los incrementos de productividad, avanzando hacia una mayor implicación de los trabajadores en la toma de decisiones. La

desigualdad de género es una vergüenza para una sociedad avanzada. Hay que continuar avanzando para que los salarios, las condiciones de trabajo, los derechos y la protección vital no sean diferentes para mujeres y hombres. Por eso hay que profundizar en las políticas de conciliación familiar. Frente a un modelo donde cada uno tiene su sitio, trabajamos por una sociedad donde todos los sitios son de todo el mundo.

9.- La democracia es el pilar central de nuestra sociedad. El secuestro del derecho a decidir de la ciudadanía por poderes que no se presentan a las elecciones debe ser revertida. Todas las políticas que afecten a la ciudadanía deben ser decididas por ella. Existen las condiciones para avanzar hacia procesos de toma de decisiones más participativos, dando voz a la sociedad civil y ampliando las cuestiones sometidas a votación directa de la ciudadanía. Muchas de las políticas están ligadas a instituciones europeas, que la actual arquitectura institucional sitúa en un terreno no-democrático (un ejemplo del cual es la negociación del TTIP). Es necesaria una reforma a fondo de la Unión Europea y la zona Euro, situándola dentro de los parámetros de la democracia y el estado del bienestar. Queremos más Europa (fiscalidad y presupuestos comunitarios) pero sólo si eso significa más democracia y derechos para todos.

10.-La constitución de 1978 ya no es capaz de garantizar los derechos y las políticas a las que aspirábamos. Es necesario impulsar un proceso constituyente basado en el protagonismo de la ciudadanía. Hace falta una nueva articulación territorial del estado que permita la ensambladura de la plurinacionalidad. Queremos nuevas instituciones más transparentes, más eficientes y más abiertas a la participación. Queremos un blindaje efectivo de los derechos sociales.

Las personas que firmamos este acuerdo somos conscientes de que las elecciones de diciembre no sólo decidirán quién ocupará la silla de uno u otro gobierno sino que marcarán el rumbo del Estado para las próximas generaciones y, por tanto, son de una transcendencia absoluta para el País Valencià. Los y las valencianas hemos sido demasiado tiempo invisibles. Ahora nos toca hablar. Por nosotros, por todas, por todos. Es el momento!

Valencia, octubre de 2015